SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 32/2013

Recomendación N°	32/2013
Autoridades Responsables	Director General de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez
Expediente	1VQU-346/2013
Fecha de emisión	30 DE DICIEMBRE DE 2013
HECHOS	
<p>El 8 de julio de 2013, Q1 presentó queja ante este Organismo Estatal, solicitando el apoyo e intervención debido a que su padre V1 había sido detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, sin que les proporcionaran información a sus familiares sobre el motivo de la detención, manteniéndolo incomunicado.</p> <p>En atención a lo anterior, el 8 de julio de 2013, personal de este Organismo Público Autónomo entrevistó a V1 en los separos de la Policía Ministerial del Estado, y señaló que aproximadamente a las 11:00 horas, se encontraba con otras personas sobre la carretera que conduce al municipio de Rioverde, a la altura de la Glorieta Benito Juárez, cuando se presentó el Subdirector de la Policía Preventiva de ese municipio en compañía de varios elementos de la misma corporación, y dirigiéndose hacia su persona le indicaron que los acompañara, al negarse a ello fue sujetado pro los brazos al momento que le decía que “estaba detenido” y de inmediato lo subieron a una Patrulla.</p> <p>El agraviado manifestó que los policías lo llevaron a un lugar que parecía una bodega, lugar en el cual permaneció hasta las 14:00 horas de ese día, ya que lo sacaron del lugar y lo llevaron a las instalaciones de la Policía Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, y que le permitieron comunicarse con su familia a las 18:00 horas. Que después lo pusieron a disposición del Ministerio Público bajo los cargos de motín y ataques a las vías de comunicación.</p>	
Derechos Vulnerados	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A la legalidad ✓ A la seguridad jurídica
OBSERVACIONES	
<p>El 8 de julio de 2013, aproximadamente entre las 13:30 y las 14:00 horas, V1 fue detenido por AR1 y AR2, elementos de la Dirección de Tránsito y Policía Vial de Soledad de Graciano Sánchez, cuando se encontraba con un grupo de personas sobre la carretera a Rioverde en la intersección con Avenida de los Árboles, de la Colonia Hogares Ferrocarrileros del citado municipio.</p> <p>La autoridad municipal señaló en su informe que los elementos de policía procedieron a la detención del agraviado, bajo el argumento que incitaba a un grupo de personas que realizaban una protesta pública para que agredieran a los agentes de policía que se encontraban en el lugar, y no obstante que funcionarios</p>	

municipales los invitaban al diálogo, en determinado momento V1 propinó un golpe a AR1, motivo por el cual procedieron a su aseguramiento.

La citada autoridad también precisó en su informe, que AR1 y AR2, después de proceder a la detención de V1, lo trasladaron a la Comandancia de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, lugar en el que fue certificado por Médico Legista, y una vez que elaboraron la papelería relacionada con el caso, lo pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común.

Respecto a la cronología sobre la detención de V1, de la evidencia se advirtió que en el Parte Informativo, los agentes aprehensores precisaron que el primer contacto con la víctima se realizó a las 13:30 horas del día de los hechos, y en el Informe Homologado elaborado por los mismos elementos de policía, se registró que la detención se llevó a cabo a las 14:00 horas; que a las 14:20 horas pasó a la certificación médica, para finalmente ponerlo a disposición del Agente del Ministerio Público, a las 18:40 horas del mismo día.

Cabe aquí hacer la precisión que la víctima señaló en su queja, que se le aprehendió aproximadamente a las 11:00 horas del día de los hechos, y que posterior a ello fue llevado a una bodega, para después llevarlo a la barandilla municipal. Por lo que hace a este aspecto, no se encontraron mayores elementos para acreditar tal señalamiento, por lo que el presente pronunciamiento se enfoca a la demora de los aprehensores para ponerlo a disposición de la autoridad competente para que se definiera su situación jurídica, así como de la falta de informe sobre los motivos de la detención y la incomunicación de que fue víctima en el lapso que duró a disposición de la policía municipal.

Lo anterior no es obstáculo para que la autoridad municipal competente, lleve a cabo una investigación de esta contradicción entre lo que señala la víctima y lo asentado por los agentes aprehensores, para el debido esclarecimiento de este hecho y el correspondiente deslinde de la responsabilidad si así fuere el caso, sobre todo tomando en consideración que las anotaciones del Parte Informativo con el Informe Homologado no son concordantes en cuanto al primer contacto con V1 y el registro de su detención.

En este orden de ideas, esta Comisión Estatal encontró evidencia suficiente que le permite acreditar que existió una demora injustificada para poner a disposición de V1 ante la autoridad competente en los términos que establece el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que después de ser detenida una persona cuando esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, deberá ser puesto sin demora a disposición de la autoridad más cercana y con la misma prontitud, a la del Ministerio Público, además de llevar un registro inmediato de la detención, lo cual en el presente caso no ocurrió. En efecto, por lo que corresponde al registro de la detención, como ya se citó, la autoridad señalada como responsable en el Parte Informativo precisó que se tuvo un primer contacto con V1 a las 13:30 horas del día de los hechos, y en el Informe Homologado se advierte que la detención se llevó a cabo a las 14:00 horas, sin que se advirtiera o se precisara en qué consistió el primer contacto, ni existe aclaración posterior en los

citados documentos, es decir, precisar de manera adecuada las circunstancias de la detención, los motivos de la misma, así como la precisión de la hora de la aprehensión, de tal manera que la información sea concordante entre los documentos citados.

De la información que proporcionó la Autoridad Municipal, se advierte que el Informe Policial Homologado solamente consta de cuatro fojas, y el llenado correspondiente solamente consta de dos de ellas, omitiendo con ello ajustarse a lo dispuesto en el artículo 95, párrafo V, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de San Luis Potosí, en el cual se menciona que las instituciones de seguridad pública contarán con registros administrativos donde conste la detención y el ingreso a los separos, y que al menos debe contener el motivo, circunstancias generales, lugar, fecha, y hora en que se haya practicado la detención, lo cual no se llevó a cabo en el presente caso. Aunado a lo anterior, se encontró evidencia suficiente para acreditar que en el caso se incurrió en retención indebida por parte de los agentes aprehensores, al exceder de manera injustificada el plazo razonable para que el agraviado fuera puesto a disposición del Ministerio Público de manera inmediata, a efecto de que se definiera y determinara su situación jurídica, causando con ello una violación a sus derechos humanos, tomando en cuenta el Informe Policial Homologado de que la detención se llevó a cabo a las 14:00 horas del 8 de julio de 2013, y que la puesta a disposición ante autoridad competente fue a las 18:40 horas.

Es de llamar la atención que en la información que remitió la Autoridad Municipal haya señalado que el artículo 16 de la Carta Magna no refiere término en horas en las que se deba poner y/o dejar a disposición a un detenido, pero no aportó elementos de convicción para justificar las más de cuatro horas y media que permaneció el agraviado en las instalaciones de la Policía Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, aunado al hecho de que el Parte Informativo consta de dos fojas, y el Informe Policial Homologado, es un formato de cuatro fojas, y los agentes aprehensores sólo llenaron dos de ellas. Es decir, transcurrieron más de cuatro horas y media para que V1 fuera trasladado de la Comandancia de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez hasta el Edificio de Seguridad Pública donde se localiza la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Mesa de Detenidos, sin que la autoridad haya aportado elementos para justificar esta demora, cuando la distancia entre ambos puntos se recorre en un tiempo aproximado de veinte minutos, sobre todo que las cabeceras municipales de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí conforman una zona conurbada metropolitana, mismas que cuenta con vialidades accesibles para el tránsito entre ambas demarcaciones.

Para este Organismo Público Autónomo es de llamar la atención que a manera de justificar la demora, la autoridad haya argumentado en su informe que no hubo tardanza y que el tiempo utilizado fue el razonable, debido al trámite de la documentación para luego proceder a presentar a la víctima ante la autoridad competente, cuando los únicos documentos fueron el certificado médico, el Parte Informativo y el Informe Policial Homologado, mismos que de acuerdo a la evidencia no revistieron mayor complejidad para su

elaboración.

La autoridad municipal solamente señaló que la demora se debió a la elaboración de la documentación relacionada con la detención de la víctima, sin hacer alusión a que la puesta de V1 ante el Agente del Ministerio Público le representó dificultades y que por ello se debió el retraso, ya fuera por el número de las personas que sobre el mismo hecho se hayan detenido, la distancia alejada entre una dependencia y otra, lo inaccesible de las vías de comunicación entre ambos sitios, del riesgo que les representaba el traslado del detenido en atención a la gravedad del delito, o bien de la falta de seguridad tanto para la víctima como para los elementos de policía, generando con ello un acto de molestia al agraviado y excediendo el plazo razonable para turnarlo a la autoridad competente.

Cuando se cuestiona la observancia del plazo razonable, corresponde a la autoridad exponer y probar la razón por lo que se ha requerido más tiempo que el que sería razonable en principio para resolver un asunto, o como el caso en particular, para poner a disposición al agraviado ante la autoridad competente, ya que cuando existe una demora prolongada, ésta puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de los derechos humanos. El plazo debe ser razonable en función de las circunstancias; la inmediatez atañe al debido proceso y la justicia debe ser pronta y expedita, por lo que quienes enfrentan una acusación penal no deben enfrentar tardanzas injustificables que le causen agravio.

Por lo anterior, es necesario que se investigue esta circunstancia para determinar si el plazo que surgió entre la detención y puesta a disposición del agraviado ante autoridad competente, fue razonable a la luz de la complejidad del asunto, según el estándar de la Corte Interamericana, para deslindar si la actividad fue ejercida con cautela justificable, o se incurrió en la excesiva tardanza o exasperante lentitud. No se justifica el exceso en la dilación del plazo, cuando la misma se origina por la falta de diligencia o profesionalismo de las autoridades a cargo de un asunto en el cual se encuentren personas detenidas.

Por lo que hace a la queja sobre la incomunicación del agraviado, de los elementos de convicción que de la investigación se recabaron, existen datos suficientes que permiten acreditar que en el caso existió incomunicación del agraviado ya que la autoridad no aportó información que permitiera sustentar, tanto que se dieron informes al agraviado sobre los motivos de la detención como que sus familiares o su defensor tuvieron contacto con él para conocer de la situación y motivos de su detención.

En efecto, de la información que se remitió a este organismo público autónomo, no hay constancia de que se permitiera al agraviado realizar una llamada telefónica, ni de las circunstancias por las cuales la autoridad tuvo la dificultad para que V1 pudiera hacer efectivo esa prerrogativa. Es decir, no hay registro alguno de que la víctima haya sostenido comunicación con sus familiares o su defensor durante el tiempo que permaneció en los separos de la policía municipal de Soledad de Graciano Sánchez, esto es, de las 14:00 a las 18:00 horas cuando

fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común.

Esta Comisión Estatal documentó que fue hasta el momento que V1 se encontraba a disposición del Ministerio Público, cuando entabló comunicación tanto con un defensor como sus familiares Q1 y T1, circunstancia que también fue corroborada por ellos, y que ante la omisión de la autoridad de informar al respecto, se tiene por cierta, salvo prueba en contrario, en términos del artículo 124 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En tal sentido, en razón que la autoridad no aportó elementos de convicción en el que conste que a V1 se le indicaron los motivos de la detención y que se le permitió tener comunicación con sus familiares o abogado, se contravino lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracciones II, III y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se señala que toda incomunicación queda prohibida y será sancionada por la ley penal, que todo detenido tiene derecho a que se le informe, desde el momento de su detención, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, y que el defensor puede ser nombrado por el detenido desde el momento de la detención.

Por lo que respecta al pago de la reparación del daño, el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero, y 113, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 7, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, señalan la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público estatal, formule una recomendación que incluya las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación del daño.

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se de vista Órgano Interno de Control de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, a efecto que se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos.

SEGUNDA. Gire instrucciones a Jefes y Personal Operativo de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, que en lo futuro eviten demoras o retrasos injustificados en la elaboración de los Partes Informativos, Informe Policial Homologado y las puestas a disposición de los detenidos ante las autoridades competentes.

TERCERA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el programa de capacitación permanente a los elementos operativos de la Dirección Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el tema de derechos humanos, en particular los derechos que prevalecen durante la detención.